

La consulta plantea, si los centros privados concertados vulneran, la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, sí en un procedimiento de concurrencia competitiva muestran el expediente administrativo a los interesados en dicho procedimiento.

Esta cuestión ya ha sido analizada por la Agencia Española de Protección de Datos en el informe de fecha 20 de abril de 2007, en el que se establecía que;

*“Con carácter general, debe indicarse que la comunicación de datos a los que se refiere la consulta constituye, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999, una cesión de datos de carácter personal, definida como “Toda revelación de datos efectuada a persona distinta del interesado”.*

*Por otra parte, la cesión o comunicación de datos de carácter personal viene regulada en el artículo 11.1 de la Ley Orgánica al establecer que “los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado.”*

*No obstante, el artículo 11.2 dispone que “El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso:*

- a) Cuando la cesión está autorizada en una Ley.*
- b) Cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público.*
- c) Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de*

*terceros. En este caso la comunicación sólo será legítima en cuanto se limite a la finalidad que la justifique.*

*d) Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. Tampoco será preciso el consentimiento cuando la comunicación tenga como destinatario a instituciones autonómicas con funciones análogas al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas.*

*e) Cuando la cesión se produzca entre Administraciones Públicas y tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos.*

*f) Cuando la cesión de datos de carácter personal relativos a la salud sea necesaria para solucionar una urgencia que requiera acceder a un fichero o para realizar los estudios epidemiológicos en los términos establecidos en la legislación sobre sanidad estatal o autonómica.”*

*Teniendo en cuenta lo que se acaba de indicar, la comunicación del expediente, requerirá el consentimiento del interesado a menos que la misma pueda ampararse en alguno de los supuestos excepcionados por el citado artículo 11.2. Pudiendo resolverse la cuestión, desde el ejercicio del derecho de acceso a la documentación obrante en el procedimiento, de aquellos que tengan la consideración de interesado, por aplicación de los principios establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.*

*Lo que en primer lugar, nos obliga a analizar si a los centros privados concertados le resulta de aplicación la Ley 30/1992, para lo cual es necesario acudir a la regulación que existe sobre la materia.*

*En primer lugar Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo de Enseñanza en General, remite a la normativa autonómica en cuanto a la tramitación de los procedimientos, pues no son de competencia exclusiva del Estado así se deduce de lo dispuesto en su Disposición final sexta que*



*señala “Las normas de esta Ley podrán ser desarrolladas por las Comunidades Autónomas, a excepción de las relativas a aquellas materias cuya regulación se encomienda por la misma al Gobierno o que corresponden al Estado conforme a lo establecido en la disposición adicional primera, número 2, de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación.”*

*La Legislación andaluza sobre la materia se concreta en el Decreto 53/2007, de 20 febrero, de la Consejería de Educación de Andalucía que regula la enseñanza no universitaria, y resulta aplicable al supuesto planteado el artículo 34. 2 que determina lo siguiente “Los acuerdos y decisiones que sobre la admisión del alumnado adopten los titulares de los centros docentes privados concertados podrán ser objeto de reclamación en el plazo de un mes ante la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa. Cuando dicha reclamación se presente ante el titular del centro docente privado concertado, éste deberá remitirla a la Delegación Provincial en el plazo de diez días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente.”*

*Por tanto, dado que la resolución de la reclamación ponen fin a la vía administrativa, ello implica que ha de tratarse de un acto administrativo, pues sólo ponen fin a dicha vía los actos administrativos, que en todo caso deberán de ajustarse a la Ley 30/1992. En definitiva podemos afirmar que a los colegios privados concertados les resulta de aplicación la Ley 30/1992.*

*En este sentido, el artículo 31 de la Ley 30/1992 delimita jurídicamente el concepto de interesado en el procedimiento administrativo, indicando a tal efecto que se considerarán como tales en el procedimiento “a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos; b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte; y c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar*

*afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva”.*

*Es decir, en virtud de lo establecido en el artículo 31 que se cita, se puede entender por interesado en todo procedimiento sancionador aquel frente al que el procedimiento se dirige como presunto infractor de las normas administrativas.*

*A su vez, el artículo 35.a) de la misma Ley recoge el derecho de los ciudadanos a “A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos”.*

*En consecuencia, aquella persona o personas que ostenten la condición de interesado en los términos del artículo 31 de la Ley 30/1992, tendrá derecho a conocer el estado de la tramitación del, resultando la comunicación de los referidos datos conforme a lo establecido en el artículo 11,2.a) de la Ley 15/1999.”*